

Un desafío a la USA Patriot Act

George Christian, Barbara Bailey,
Peter Chase y Janet Nocek

Bibliotecarios de Connecticut (EE.UU.)

Si hace dos años hubiéramos escrito estas palabras, nos hubieran detenido. Hace dos años estábamos bajo una orden federal de secreto que nos impedía revelar que éramos los demandantes del conocido caso "John Doe Connecticut". Nosotros, cuatro bibliotecarios de Connecticut fuimos llamados John Doe porque nuestros verdaderos nombres eran considerados una amenaza para la seguridad nacional. En Estados Unidos "John Doe" se usa cuando el nombre de un caso legal no puede ser revelado. En este artículo queremos contar cómo perdimos nuestro derecho a hablar y cómo lo recuperamos; además queremos explicar por qué la intimidad de los usuarios de la biblioteca es tan importante, y comentar la amenaza que se cierne hoy día sobre el derecho a la intimidad de todos los ciudadanos de Estados Unidos.

El colectivo John Doe lo forman en realidad cuatro individuos: George Christian, Director Ejecutivo del consorcio de bibliotecas *Library Connection, Inc.*, y los otros tres miembros del Comité Ejecutivo de su Junta Directiva: Barbara Bailey, Presidente de la Junta y Directora de la Biblioteca Pública (*Welles-Turner Memorial Library*) de Glastonbury, Connecticut; Peter Chase, Vicepresidente de la Junta y Director de la Biblioteca de Plainville, Connecticut; y Janet Nocek, Secretaria de la Junta y Directora de la Biblioteca de Portland, Connecticut.

Library Connection, Inc. (LCI) es un consorcio de 27 bibliotecas que compar-

ten un mismo sistema automatizado de bibliotecas; en 2006, casi la mitad de estas bibliotecas utilizó los servicios de telecomunicaciones que ofrecía el consorcio. La dirección de LCI corresponde a una junta de 14 miembros, incluidos los del comité ejecutivo: un presidente, un vicepresidente y un secretario. LCI tiene en plantilla al director ejecutivo y a siete empleados más; su sede está en Windsor, Connecticut.

LCI no recibe ningún tipo de financiación federal o estatal; el presupuesto anual de un millón de dólares proviene de las partidas que dedican a ello las bibliotecas del consorcio. La colección del conjunto de bibliotecas está formada por un millón de títulos, y tres millones de ítems; el número anual de préstamos ronda los siete millones. Nuestras bibliotecas atienden a veintiséis comunidades distintas, con una población total de 718.000 habitantes; 282.000 de ellos están inscritos como usuarios de nuestros centros. Connecticut es un estado pequeño, apenas un rectángulo de 80 x 160 kms., con 169 municipios. Los carnés de biblioteca emitidos por cualquier biblioteca pública de Connecticut tienen validez en todos y cada uno de los centros del estado. Los materiales prestados desde cualquier biblioteca pueden ser devueltos en cualquier otra, de modo que los usuarios están acostumbrados a utilizar, según su conveniencia, un gran número de bibliotecas.

El 8 de julio de 2005, Ken Sutton, Responsable del Centro de Datos y Telecomunicaciones de LCI, recibió una llamada

de la oficina local del FBI, la policía federal: le comunicaron que LCI iba a recibir una "Notificación de Seguridad Nacional" y le preguntaron a quién debían dirigir la notificación. Sutton respondió que el destinatario debía ser George Christian, director ejecutivo del consorcio.

El 13 de julio de 2005, la Notificación de Seguridad Nacional fue entregada en mano por dos agentes del FBI. Al leerla, Christian se dio cuenta de que la notificación estaba fechada el 19 de mayo, aún iba dirigida a Ken Sutton y solicitaba información sobre el uso de una dirección IP propiedad de LCI durante un período de 45 minutos el día 15 de febrero. El FBI trataba de averiguar quién había usado un ordenador concreto de la biblioteca. Christian se sintió aliviado al ver las fechas, y pensó que no existía flagrante delito ni urgencia, de este modo, su resistencia a colaborar no iría en perjuicio de sus conciudadanos. Los agentes del FBI insistieron en que Christian relevara el párrafo de la notificación relativo a la orden de imposición de secreto. Conforme a sus términos, Christian no podía revelar siquiera que el FBI se había puesto en contacto con él. Él comunicó a los agentes que tenía serios motivos para creer que el FBI tenía prohibido usar las Notificaciones de Seguridad Nacional y que quería consultar a su abogado; después de dejarle un teléfono de contacto para que su abogado llamara, los agentes del FBI se marcharon.

Esta era la primera vez que Sutton y Christian oían hablar de la existencia de las Notificaciones de Seguridad Nacional. Nuestra abogada, Barbara McGrath, nos explicó que su existencia había pasado casi inadvertida, pero que dichas notificaciones formaban parte de la *USA Patriot Act*, ley que el parlamento estadounidense había aprobado apresuradamente tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Gracias a estas notificaciones, el FBI podía conseguir información confidencial sin una orden judicial. La nueva ley permitía usar las Notificaciones de Seguridad Nacional incluso contra ciudadanos que no estaban bajo sospecha de haber cometido delito alguno; podían ser usadas contra cualquiera. Aquéllos sobre los que recayera un requerimiento de información estaban sujetos, de por vida, a un deber de secreto, y nunca podrían revelar que habían recibido dicho requerimiento. Apparentemente, no había forma de recurrir las órdenes de imposición de secreto.

Un estudiante de derecho que colaboraba con la abogada Barbara McGrath, descubrió que un Proveedor de Servicios de Internet de Nueva York había recibido tam-

bién una Notificación de Seguridad Nacional en 2004, y que había impugnado tanto el cumplimiento de la demanda de información, como el mandato de no divulgación en el Tribunal Federal; este individuo era conocido como "John Doe Nueva York". El tribunal inferior había dictaminado que las Notificaciones de Seguridad Nacional violaban la Constitución de Estados Unidos, pero el fallo estaba recurrido.

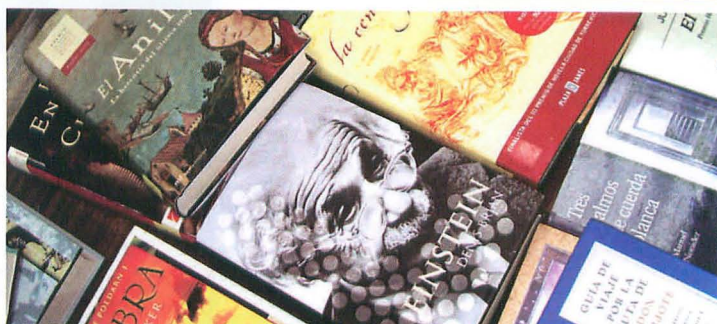
Barbara McGrath le explicó a Christian que el único modo de impugnar tanto la orden de imposición de secreto a LCI, como el cumplimiento de los términos de la Notificación de Seguridad Nacional, era demandar al Ministro de Justicia de Estados Unidos, por aquel entonces John Ashcroft. Christian considero que no era ético comprometer a todo el consorcio en una lucha titánica sin contar con su consentimiento previo, pero la orden de imposición de secreto impedía discutir el asunto con los 14 miembros de la junta directiva. Para solventar el problema, Christian decidió solicitar que el Comité Ejecutivo actuara en representación de la junta directiva, y al día siguiente convocó una reunión urgente del Comité Ejecutivo.

Los miembros del Comité Ejecutivo se escandalizaron al oír las noticias y la explicación legal de Barbara McGrath. Además, al mismo tiempo que LCI recibía la Notificación de Seguridad Nacional, el gobierno de EE UU estaba intentando conseguir una prórroga de la *Patriot Act* en el parlamento. El gobierno mantenía que no estaban aplicando la *Patriot Act* en contra de ninguna biblioteca y poco después John Ashcroft declaró que los bibliotecarios eran unos "histéricos" por tener tantas reservas. Pero tras recibir nuestra propia Notificación de Seguridad Nacional fuimos plena y dolorosamente conscientes de que la *Patriot Act* estaba siendo utilizada para obtener información sobre los usuarios; de pronto, nos habíamos convertido en cómplices del secreto al estar obligados a mantener la boca cerrada y así cooperar con el espionaje del gobierno.

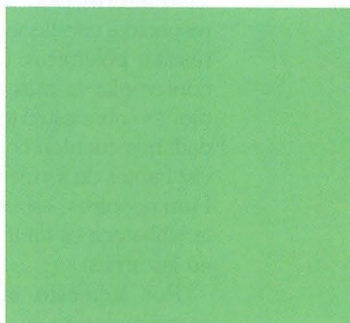
Estamos plenamente convencidos de que los usuarios de bibliotecas tienen derecho a la intimidad; los libros que toman en préstamo o la información que consultan en Internet debe ser confidencial para respetar tanto sus derechos individuales como la función principal de la biblioteca, que no es otra que la de fomentar el acceso a la información para todos los ciudadanos, sin ningún tipo de restricciones. En EE UU es frecuente que los usuarios hagan preguntas confidenciales sobre problemas médicos, legales y personales. Es común que alguien acuda a la biblioteca a buscar libros de medicina y que para pre-

Red de bibliotecas Obra Social CAJA MADRID

39 centros a disposición de la sociedad



Más de 500.000 ejemplares
Actividades de animación a la lectura
Apertura extraordinaria en época de exámenes
Prensa diaria y revistas
Catálogo en línea



Biblioteca Cultural

Exposiciones
Talleres literarios

Biblioteca Familiar

Campamentos urbanos
Actividades fin de semana



Biblioteca Digital

26 salas de informática
Internet gratuito

Biblioteca Integradora

Prensa internacional

902 13 13 60
www.obrasocialcajamadrid.es





Bibliotecarios del caso "John Doe Connecticut"

guntar por ellos le haga confidencias al bibliotecario de referencia sobre el diagnóstico que ha recibido un miembro de su familia aquejado de una grave enfermedad. Pero, además, las bibliotecas cumplen una función primordial en la democracia, ya que los ciudadanos necesitan información para tomar decisiones respecto a cuestiones políticas que puedan resultar polémicas. Las bibliotecas han de contemplar la más amplia gama de opiniones sobre estos temas para que los ciudadanos cuenten con todos los puntos de vista antes de formarse su propia opinión. Para nosotros, espiar a los ciudadanos en la biblioteca es tanto como espiar su voto en las urnas.

Por supuesto que los bibliotecarios comprendemos que una investigación criminal puede conducir a la policía a la necesidad de averiguar la identidad de un determinado usuario. Pero en estos casos, la policía tiene que consultar al juez, que actúa como parte neutral; si su necesidad de información es legítima, podrán conseguir sin problema una orden judicial. Disponer del derecho a espiar a los demás sin tutela alguna es un instrumento tan poderoso, que el usuario queda desamparado y se allana el camino a los abusos. La práctica común en Estados Unidos era que la policía actuara bajo la supervisión de los tribunales, para proteger a los ciudadanos contra posibles abusos y evitar que la policía espiera a los considerados enemigos políticos; desgraciadamente, la Patriot Act ha eliminado esas garantías.

La decisión a la que nos enfrentábamos no era fácil de tomar; uno de nosotros había perdido a un buen amigo en el primer avión que se estrelló contra las Torres Gemelas durante el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Estaba claro que nosotros no queríamos proteger a ningún terrorista; es más, con una orden judicial no hubiéramos tenido problema alguno en proporcionar la información solicitada, pero carecían de ella. Al final decidimos que no podíamos cooperar, que no podíamos traicionar la confianza de nuestros usuarios y actuar bajo cuerda. Así que nos negamos a proporcionar la infor-

mación requerida y, en lugar de ello, demandamos al gobierno de EE UU con el argumento de que la disposición de la Patriot Act referente a las Notificaciones de Seguridad Nacional era inconstitucional. Con esa actuación nos asegurábamos de que no iríamos a la cárcel, al menos mientras los tribunales decidían sobre el asunto y siempre que no reveláramos que habíamos recibido una Notificación de Seguridad Nacional.

Barbara McGrath era consciente de que este caso era demasiado serio como para ejercer de abogada nuestra, así que convenció a la *American Civil Liberties Union* para que nos representara. La *American Civil Liberties Union*, ACLU, es una organización dedicada a la defensa de los derechos de los estadounidenses; y accedieron a representarnos gratuitamente.

La primera vista en los tribunales fue sólo unas semanas después del primer recurso legal, en el verano de 2005, pero ni siquiera nos permitieron asistir como oyentes al juicio; el gobierno dictaminó que la revelación de nuestra identidad socavaría la investigación, y, por lo tanto, nuestra presencia en la sala amenazaba la seguridad nacional. La vista fue en Bridgeport, Connecticut, pero nosotros tuvimos que verla por televisión, encerrados en una sala del Tribunal de Hartford, también en Connecticut, pero a casi 100 kilómetros de distancia.

Nuestra recusación del requerimiento de la Notificación de Seguridad Nacional se basaba en múltiples argumentos; por un lado, nuestro convencimiento de que la Patriot Act era inconstitucional porque habíamos perdido nuestro derecho a hablar. Queríamos comunicarle al parlamento estadounidense y a nuestros colegas que el gobierno sí que estaba aplicando la Patriot Act contra las bibliotecas. Además argumentamos que la policía no debería estar autorizada para espiar a nadie, sobre todo sin una orden judicial. Como en el recurso anterior contra las Notificaciones de Seguridad Nacional que hemos mencionado, sosteníamos que la Ley violaba la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas de la Constitución estadounidense. Nuestro recurso contra la orden federal de imposición de secreto era tan solo el primero de los argumentos que los tribunales debían de considerar.

Inmediatamente después de la vista, recibimos una llamada de nuestros abogados desde Bridgeport; estaban muy contentos con el desarrollo de la vista y con las preguntas formuladas por la juez, que esperaban emitiera su veredicto rápidamente. Pero también nos comunicaron las malas

noticias: la juez había ordenado eliminar de los documentos legales del caso todo rastro de nuestras identidades, para que pudieran ser entregados a la prensa. Sin embargo, en uno de los documentos el gobierno no había tachado el nombre de Peter Chase y en otro no había tachado el nombre de nuestra organización, Library Connection. Así que, a pesar de que la prensa ya supiera quiénes éramos, si lo confirmábamos, podíamos ser detenidos.

La juez federal de Bridgeport rápidamente dictaminó que el mandato de no divulgación que pesaba sobre nosotros era inconstitucional, pero su fallo fue inmediatamente recurrido por el Ministerio de Justicia, ante una instancia superior.

Tan solo en un par de semanas los medios descubrieron nuestros nombres en la documentación que había hecho pública el tribunal. Durante aquellas dos semanas se publicaron algunos artículos sobre el caso, y la especulación sobre quien podría ser John Doe se disparó entre la comunidad bibliotecaria de Connecticut. Todo hasta que el *New York Times* destapó los nombres de George Christian, Peter Chase y Library Connection, Inc. Los periódicos de Connecticut relataron la historia, como hizo también el *Washington Post* y otros diarios a lo largo y ancho del país. Los teléfonos de Chase y Christian no dejaban de sonar, tanto en el trabajo como en casa.

El cumplimiento de la orden de imposición de secreto se hizo cada vez más difícil para nosotros y los nuestros. Teníamos que acudir a multitud de reuniones con los abogados en Nueva York, lo que suponía un trayecto de dos horas en tren cada vez que íbamos; pero no podíamos decirle a nadie a dónde íbamos o por qué. Una vez, un periodista llamó a casa de Peter Chase cuando él no estaba y le contó al hijo de Peter que el FBI estaba investigando a su padre. Más tarde su hijo, muy asustado, le pidió a Chase que le explicase lo que estaba pasando, pero Chase no podía contarle nada. Era peligroso que nuestros compañeros de trabajo o familiares hablaran del caso, porque corríamos el riesgo de que pareciera que habíamos incumplido la orden de imposición de secreto y se lo hubiéramos contado todo.

En noviembre, el recurso del gobierno fue visto por el Tribunal de Apelaciones de Nueva York. Esta vez nos permitieron asistir como oyentes, bajo las siguientes condiciones: no podíamos llegar juntos al tribunal, no podíamos dirigirnos la palabra entre nosotros, ni sentarnos juntos, ni mirarnos entre nosotros o a nuestros abogados; no podíamos hacer nada que indicara que estábamos implicados en el caso. El



¡Cuidado! No son cualquier bibliotecario. Son los bibliotecarios de Connecticut

tribunal estaba plagado de periodistas ese día, pero aunque conocían los nombres de Peter Chase y George Christian, no sabían qué aspecto físico tenían.

Ante el Tribunal de Apelaciones, el abogado de la ACLU argumentó que una orden de imposición de secreto no tenía ningún sentido cuando un montón de artículos de prensa había revelado ya nuestros nombres, y presentaron al tribunal un buen fajo de recortes de noticias para hacer hincapié sobre ello. El abogado del Ministerio de Justicia contestó con el peregrino argumento de que en Connecticut nadie leía el *New York Times* (aunque la mitad de la población del estado viva a una distancia que permite ir a trabajar a diario a la ciudad de Nueva York), y que, además, el gobierno estaba en posesión de un estudio que demostraba que el 64 % del público no se cree lo que lee en los periódicos. Después de la vista, el gobierno actuó para que se suprimieran las pruebas aportadas por nuestros abogados, que consistían, simplemente, en los artículos publicados por los medios.

Como el Tribunal de Apelaciones de Nueva York suele tardar en pronunciarse y, ante el temor de que el parlamento prorrogara la USA Patriot Act antes de que nosotros pudiéramos declarar, los abogados de la ACLU intentaron que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre el caso; la juez Ruth Bader Ginsburg oyó los argumentos, pero rehusó emitir un juicio basándose en el hecho de que aún había tiempo suficiente para que el Tribunal de Apelaciones levantara la orden de imposición de secreto antes de que el parlamento actuara. Desafortunadamente, la cosa no fue así y la USA Patriot Act fue prorro-

gada mientras nosotros aún estábamos obligados a guardar silencio.

La "Ley Patriótica" fue prorrogada con algunas modificaciones que, a primera vista, deberían haber aplacado nuestra preocupación; pero la realidad era que tenían el efecto contrario. La Ley modificada permitía a los destinatarios de las Notificaciones de Seguridad Nacional impugnar las órdenes de imposición de secreto después de transcurrido un año. Sin embargo, si el gobierno afirmaba que la imposición de secreto debía permanecer por motivos de seguridad nacional, el juez sería requerido a aceptar su argumento como concluyente y a negar la impugnación. De forma similar, la Ley modificada prohibía mandar Notificaciones de Seguridad Nacional a las bibliotecas, con la excepción de aquellas que ofrecen servicio de conexión a Internet; pero como es bien sabido, la práctica totalidad de las bibliotecas públicas de EE UU proporciona acceso a Internet.

Seis semanas después de que la USA Patriot Act fuera prorrogada, el Ministerio de Justicia comunicó a nuestros abogados de la ACLU que nos levantaban la orden de imposición de secreto. Como el parlamento ya había aprobado el texto modificado de la Patriot Act, informarles del hecho de que la Ley se estaba aplicando a las bibliotecas había dejado de ser relevante. Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia presentó una solicitud ante el tribunal para suprimir nuestro caso del registro, como si nunca hubiera ocurrido. El Tribunal de Apelaciones rechazó esta petición y devolvió nuestro caso a la corte federal del distrito en Bridgeport. Unas semanas más tarde, el gobierno retiró la demanda original de petición de información sobre el usuario, con lo que daba carpetazo al caso. De esta manera, el gobierno impedía al tribunal revisar la constitucionalidad de la Patriot Act, pero, para ello, tuvo que levantar nuestra imposición de secreto. De este modo, nos convertimos en los cuatro únicos destinatarios de una Notificación de Seguridad Nacional que legalmente podían hablar de la recepción de la misma. A no ser que la ley cambie, los destinatarios de las otras 300.000 Notificaciones de Seguridad Nacional emitidas desde 2001 han de llevarse a la tumba el secreto de su encuentro con el FBI.

El 11 de abril de 2007, George Christian declaró sobre lo sucedido en una vista especial ante el Parlamento de los Estados Unidos de América, con la esperanza de que alguna de las disposiciones más dañinas de la Ley pudiesen ser cambiadas.

Desde aquí queremos manifestar nuestra alegría por haber conseguido una victoria y por que las duras pruebas a que fuimos sometidos junto a nuestras familias y compañeros hayan acabado por fin. Además, estamos convencidos de que nuestra historia prueba que ninguna Constitución es suficiente por sí sola para proteger los derechos y las libertades; sólo la rebelión ciudadana contra cualquier intento de restricción de sus derechos es capaz de defenderlos con plenitud. No podemos ocultar nuestro orgullo por el hecho de que unos simples bibliotecarios hayan sido capaces de mostrar a sus conciudadanos el camino para conseguirlo. ◀▶

Traducción de la redacción de
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA

Bibliografía seleccionada de materiales acerca del Caso "John Doe Connecticut"

Libros

- FINAN, Christopher. *From the Palmer Raids to the Patriot Act: a history of the fight for free speech in America*. Beacon Press, 2007
- GOODMAN, Amy and Goodman, David. *Standing Up To The Madness: Ordinary heroes in Extraordinary Times*. Hyperion Books, 2008
- IVINS, Molly and Dubose, Lou. *Bill of Wrongs: the executive branch's assault on America's fundamental rights*. Random House, 2007
- LEONE, Richard (ed.). *Liberty Under Attack: reclaiming our freedoms in an age of terror*. Chapter 11. "The Secrecy Trump" by Ann Beeson. Public Affairs, 2007

Recursos web

- "CUATRO bibliotecarios rompen su silencio en el caso de los historiales de préstamo". Artículo de Alison Leigh Cowan en The New York Times. 31 de mayo. 2006. Trad. de Maria J. del Olmo <http://bibliotecalternativa.blogia.com/2006/junio.php>
- "DISCUSSION on the USA Patriot Act and Libraries". C-SPAN. Grabado en la Universidad de Vermont. The John Swan Intellectual Freedom Lecture dada por George Christian and Peter Chase. March 2006. <http://video.aol.com/video-detail/discussion-on-the-usa-patriot-act-and-libraries/3404892594> (Acceso 20 Marzo. 2008). Este es el video de nuestra presentación en la Universidad de Vermont.
- "FOUR Connecticut Librarians Shed John Doe Gag." American Library Association. 2006. <http://www.ala.org/ala/online/currentnews/newsarchive/2006abc/june2006ab/Default7266.htm> (Acceso 20 marzo. 2008) Además: buscar en el epígrafe "John Doe Connecticut" de la web de ALA otro muchos artículos.
- "FOUR Librarians Finally Break Silence in Records Case" by Alison Cowan. New York Times. May 31. 2006. <http://www.nytimes.com/2006/05/31/nyregion/31library.html> (Acceso 20 marzo. 2008) Alison Cowan escribió muchos artículos acerca del caso en el New York Times.
- "LIBRARIANS Denounce Gag Order in Patriot Act Case." National Public Radio. <http://www.npr.org/templates/>

story/story.php?storyId=5440211 (Acceso 20 marzo. 2008). Contiene nuevos datos y algunos clips de audios de la conferencia de prensa de 2006 en la ciudad de Nueva York.

"LIBRARIANS' NLS challenge" American Civil Liberties Union. <http://www.aclu.org/safefree/nationalsecurityletters/25680res20060526.html> (Acceso 20 Marzo. 2008). Contiene una descripción del caso, documentos legales, declaraciones de los demandantes y video clips.

U.S. Congress. Senate. Committee on the Judiciary. Testimony of George Christian. April 11, 2007. http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=2679&wit_id=6284 (Acceso 20 marzo. 2008)

Documentos judiciales

OPINION on the Consolidated Appeal of John Doe I and John Doe II, followed by Judge Cardamone's concurrence. <http://www.ca2.uscourts.gov/opinions.htm> (The United States Court of Appeals for the Second Circuit) Search on: No. 05-0570-cv

JOHN Doe I case : Amici Curiae by American Booksellers Foundation for Free Expression, American Library Association, Freedom to Read Foundation in support of plaintiffs' motion for summary judgment (John Doe I New York). http://www.aclu.org/nsf/legal/ALA_amicus.pdf

AMICI Curiae by American Association of University Professors, American Booksellers Foundation for Free Expression, American Library Association, association of American Publishers Freedom to Read Foundation, and Pen American Center in support of affirmance (John Doe I. New York). http://w2.eff.org/patriot/NSL_EFF_brief.pdf

JUDGE Victor Marrero: United States District Court. Southern District of New York John Doe, Opinion, Decision and Order. September 6. 2007: American Civil Liberties Union, American Civil Liberties Foundation vs. Alberto Gonzalez. Robert Mueller, Valeria E. Caproni. cv 04-0613. <http://f11.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/terrorism/doegonzales90607opn.pdf>

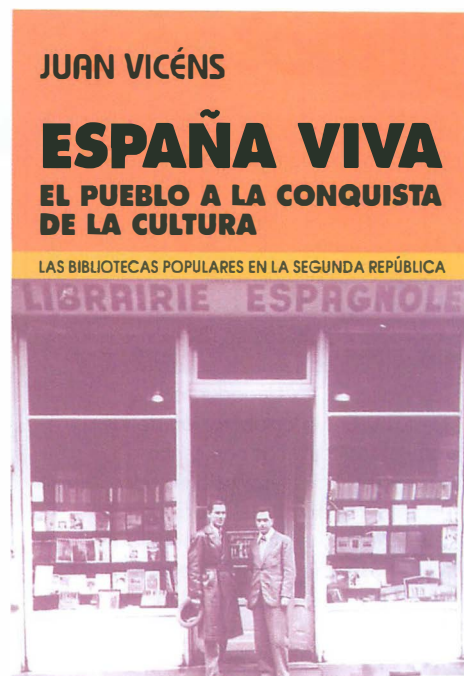
En febrero de 1938, Juan Vicéns publica *L'Espagne vivante: le peuple à la conquête de la culture* (París: Editions Sociales Internacionales) con el objeto de dar a conocer al lector francés el impulso dado a las bibliotecas populares españolas en la época republicana. En este libro, que por primera vez vemos traducido al español, se recoge la labor de inspección realizada por Vicéns en las bibliotecas creadas por el Patronato de Misiones Pedagógicas y Cultura Popular. Un recorrido histórico por las bibliotecas españolas del pasado siglo a través de la trayectoria vital de Juan Vicéns.

precio: 9 €

+ gastos de envío
Contra reembolso

**10% de descuento para
suscriptores de esta revista**

Revista EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA
C/ Príncipe de Vergara, 136, of. 2ª.
28002 Madrid
Tel. 91 411 16 29. Fax: 91 411 60 60
suscripciones@educacionybiblioteca.com



COEDITADO POR EDICIONES
VOSA Y LA ASOCIACIÓN
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

